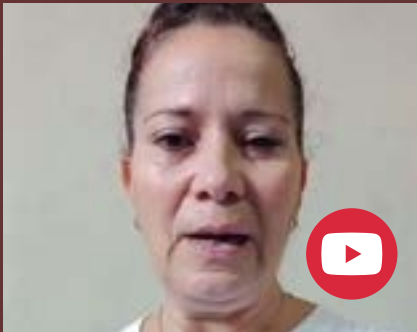




LNR Semanario

La Nueva República

Por CubaCID



Ocupan ilegalmente la casa de Laura Pollán

Laura Labrada Pollán, presidenta del Partido Cuba Independiente y Democrática (CID) e hija de la histórica líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán Toledo, denunció que la vivienda heredada de su madre permanece ocupada ilegalmente desde hace 122 días sin que la policía haya actuado para restituir sus derechos. Según explicó, la principal responsable del allanamiento sería Yanela Fernández, quien, junto a otras personas, habría entrado violentamente en la propiedad y continúa ocupándola junto con todos los bienes que permanecen en su interior, incluidos muebles de la sala, comedor, cocina y otros efectos personales. Labrada afirmó haber presentado la correspondiente denuncia ante la policía, pero aseguró que no ha recibido respuesta, cuestionando incluso que pueda hablarse de verdaderas autoridades en un país donde no se protege el derecho de propiedad. El caso refleja la profunda indefensión jurídica que enfrentan los ciudadanos cubanos cuando sus derechos entran en conflicto con la voluntad del poder. Resulta especialmente significativo que la víctima sea la hija de Laura Pollán, fundadora de las Damas de Blanco y símbolo internacional de la lucha pacífica por la libertad de los presos políticos. La ausencia de una respuesta oficial pone de manifiesto la falta de garantías legales y la inexistencia de un Estado de derecho efectivo en Cuba.

EDITORIAL

La transición de Cuba no puede repetir el modelo del interinato venezolano

La captura y salida del poder de Nicolás Maduro ha abierto una nueva etapa para Venezuela. Sin embargo, la experiencia del gobierno interino en ese hermano país demuestra que ese modelo no constituye una fórmula conveniente para Cuba. Por ejemplo, las grandes inversiones que se esperaban para la explotación de petróleo en Venezuela no se han concretado por falta de confianza en lo que sucederá. Cuba enfrenta una realidad económica, institucional y social tan crítica que no puede permitirse meses de incertidumbre política ni estructuras de poder transitorias sin la capacidad de tomar decisiones estratégicas de largo alcance.

Cuba necesitará, desde el primer día, un despegue acelerado de fuerzas productivas. Después de décadas de planificación centralizada, destrucción del aparato empresarial, falta de inversión y emigración masiva del capital humano, la reconstrucción económica exigirá decisiones rápidas y profundas. Para que se materialicen inversiones nacionales y extranjeras será imprescindible ofrecer seguridad jurídica, respeto a la propiedad, independencia judicial y estabilidad institucional. Ningún inversionista serio comprometerá recursos importantes si percibe que el país permanece bajo un esquema provisional cuyo futuro político es incierto.

Por esa razón, la transición democrática debe comenzar desde el primer momento. No se trata únicamente de organizar elecciones libres, sino de establecer un marco institucional creíble que garantice el Estado de derecho, la separación de poderes y reglas claras para todos los actores económicos y políticos. Solo así será posible generar la confianza necesaria para reconstruir la economía cubana.

Igualmente importante será la calidad del liderazgo encargado de conducir ese proceso. La transición no puede convertirse en una competencia anticipada por posiciones de poder ni en un escenario donde predominen intereses personales, partidistas o presiones



de gobiernos extranjeros. Quienes asuman la responsabilidad de dirigir esa etapa deberán hacerlo con una misión muy concreta: estabilizar el país, reconstruir sus instituciones y preparar el camino para una democracia sólida y permanente.

La administración de una transición requiere conocimientos técnicos, experiencia en gestión pública, capacidad para negociar consensos y una absoluta dedicación al interés nacional. El objetivo principal no debe ser construir carreras políticas, sino reconstruir un Estado funcional que permita a los ciudadanos decidir libremente su futuro mediante elecciones transparentes una vez restablecidas las condiciones institucionales.

Cuba enfrenta desafíos incluso mayores que los de otras transiciones recientes. Será necesario recuperar la producción agrícola, reconstruir la infraestructura, modernizar el sistema energético, restablecer la confianza del sistema financiero internacional y atraer miles de millones de dólares en inversión. Ninguna de esas tareas admite improvisación ni prolongados períodos de indefinición política.

La prioridad nacional debe ser dar pasos firmes y sin pérdida de tiempo para la reconstrucción del país, no la disputa por el poder. Una transición democrática eficaz necesita dirigentes preparados, independientes y comprometidos exclusivamente con el interés de Cuba. Solo un gobierno de transición con autoridad, credibilidad y capacidad ejecutiva podrá crear las condiciones para que el país recupere el crecimiento económico, fortalezca sus instituciones y consolide una democracia estable y duradera.

La experiencia venezolana ofrece lecciones valiosas. Cuba tiene la oportunidad de aprender de ellas para diseñar un modelo propio que coloque, desde el primer día, la reconstrucción nacional por encima de cualquier interés económico o político particular.

Por Roxana Rodríguez, Secretaria de Relaciones Internacionales del CID



ILUSTRACIÓN. CPT

Extraordinarios actos de valentía

Históricamente, el régimen castrista ha intentado silenciar toda voz disidente y ha impuesto castigos brutales a quienes se atreven a protestar o denunciar sus abusos. Por eso, disenter en Cuba ha sido siempre un extraordinario acto de valentía.

Hoy, cientos de hombres y mujeres padecen sufrimientos inimaginables en las cárceles del régimen. Las golpizas, el maltrato psicológico, el hambre, la enfermedad y el aislamiento son armas utilizadas para quebrar sus vidas y destruir su voluntad. Esta realidad debe denunciarse: son personas inocentes, sometidas a tratos crueles e inhumanos, privadas de sus derechos y abandonadas a merced de un sistema donde la justicia no existe.

Aunque el régimen lo niegue, en Cuba existen más de 1.300 presos políticos, condenados por protestar, expresarse y exigir sus derechos. Han sido acusados de delitos fabricados y procesados por tribunales subordinados a la Seguridad del Estado. Desde el estallido social del 11 de julio, la represión se ha ensañado aún más contra quienes disienten, porque cada voz libre amenaza a un régimen que teme otro estallido social, esta

vez definitiva.

En las cárceles cubanas mueren todos los meses presos políticos víctimas de enfermedades desatendidas, hambre y golpizas. Muchos son desconocidos por el mundo y por el propio pueblo cubano. Sus muertes ocurren en silencio, sin titulares, investigaciones ni responsables; dejan luto y dolor en familias indefensas, mientras el régimen oculta sus nombres y las verdaderas circunstancias de sus muertes.

La prisión busca castigar de la manera más despiadada, pero también condenar a sus víctimas al olvido. Todo cubano que levanta la voz puede ser encarcelado mediante una acusación inventada. El régimen fabrica delitos y presenta a los presos políticos como delincuentes comunes para encubrir la persecución. Dentro de las cárceles, vulnerables ante un aparato cruel y corrupto, sufren toda clase de abusos: son aislados, privados de visitas familiares y, en casos extremos, las autoridades ocultan incluso dónde se encuentran. No basta con encarcelarlos: el régimen pretende borrarlos, silenciarlos y lograr que Cuba olvide que existen.

Opinión



Daniel Ortega.

Ortega ha puesto sus barbas en remojo

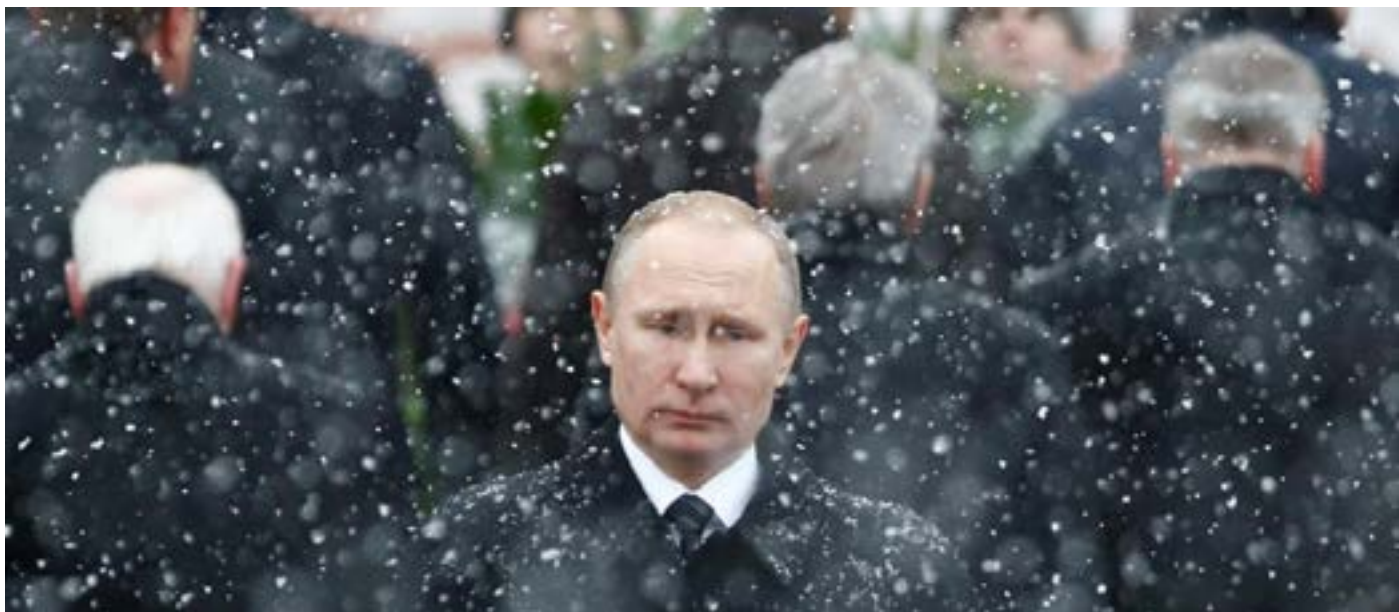
Daniel Ortega ya no oculta su dictadura. El 19 de julio declaró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” que permitan a la oposición recuperar el Gobierno. Su afirmación no fue solamente una amenaza contra el pueblo nicaragüense: fue la reacción de un gobernante que observa cómo desaparecen los pilares regionales que durante años le dieron respaldo político, recursos y sensación de impunidad.

El primer golpe fue la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. La operación demostró que el aparato militar, los servicios castristas y las alianzas internacionales no pudieron proteger al déspota venezolano. Para Ortega, el mensaje fue inequívoco: ningún dictador está necesariamente a salvo.

El segundo golpe es la crisis del castrismo. Cuba padece apagones nacionales, escasez de combustible, hambre y una economía incapaz de sostener a la población. Sin la subvención venezolana, el régimen se aproxima a una crisis terminal que ofrece a Donald Trump y Marco Rubio la oportunidad de dar jaque mate a casi siete décadas de dictadura. Ortega queda aislado.

Su respuesta ha sido cerrar cualquier posibilidad de cambio democrático. Desde su regreso al poder en 2007, Ortega subordinó el Consejo Electoral, la Asamblea, la Justicia y la Policía. La represión de 2018 dejó centenares de muertos y provocó encarcelamientos, confiscaciones y exilio. En 2021 eliminó a sus principales rivales antes de las elecciones. Ahora pretende prolongar a siete años el mandato de la “copresidencia” que comparte con Rosario Murillo y excluir a quienes el régimen califique como “traidores”.

INTERNACIONAL



En dos decenios, Vladimir Putin ha devuelto a una Rusia derrotada tras el desmembramiento de la URSS un papel central en la esfera internacional Sergei Karpukhin / Reuters

Putin: la obsesión imperial que fortaleció a Ucrania

Putin conoce los siglos de resistencia ucraniana y el referendo de 1991, cuando más del 90% de los ucranianos votaron por separarse de la Unión Soviética. La independencia obtuvo mayoría en todas las regiones, incluidas Crimea, Donetsk y Lugansk.

Pero se niega a aceptar su significado. Presenta las aspiraciones nacionales ucranianas como conspiraciones extranjeras y considera que Ucrania no tiene derecho a escoger un destino contrario a Moscú. Su independencia sería una desobediencia que debe corregirse.

Esa mentalidad tiene antecedentes. A principios del siglo XVIII, parte de Ucrania conservaba autonomía bajo el Hetmanato cosaco. Su gobernante, Iván Mazepa, se alió con Suecia buscando liberarse del control ruso. Pedro el Grande lo consideró una traición y en 1708 su ejército destruyó Baturyn, capital del Hetmanato, y asesinaron a miles de sus habitantes.

Catalina la Grande eliminó después la autonomía cosaca. Durante el siglo XIX, el Imperio ruso restringió la lengua ucraniana, consciente de que conservar el idioma y la cultura podía fortalecer las aspiraciones de independencia.

Stalin llevó esa política a extremos devastadores. Entre 1932 y 1933, la colectivización forzosa y las requisas de alimentos provocaron el Holodomor, en el que murieron entre 3,5 y 5 millones de ucranianos. También persiguió o ejecutó a quienes preservaban la identidad nacional.

Putin comparte su lógica imperial: considera que la afirmación nacional ucraniana amenaza el dominio de Moscú y que puede quebrarse mediante la fuerza, el miedo y el sufrimiento colectivo.

Las atrocidades contra civiles no son solamente excesos aislados. Aunque no toda muerte sea deliberada, el conjunto documentado —bombardeos, ataques sistemáticos contra la energía, torturas, ejecuciones, deportaciones y persecución cultural— revela una estrategia de coerción.

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, Rusia realizó al menos 423 ataques contra instalaciones eléctricas y 74 contra sistemas de calefacción. Según la ONU, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 murieron 1.272 civiles y 6.871 resultaron heridos.

Putin intenta hacer insoportable la vida cotidiana y conseguir desde el aire lo que no logró en el campo de batalla. Pero los ataques fortalecieron la identidad ucraniana, su rechazo a Rusia y el apoyo internacional.

Su persistencia parece combinar rigidez intelectual, incapacidad para reconocer un error y necesidad de castigar a quienes desafían su autoridad. Esperaba que el gobierno ucraniano cayera rápidamente, que la población aceptara a sus tropas y que Occidente reaccionara con debilidad. Ocurrió lo contrario.

La invasión produjo precisamente aquello que Putin pretendía impedir. Millones de ucranianos que antes mantenían vínculos culturales, familiares e incluso lingüísticos con

Rusia comenzaron a verla como una potencia agresora. La guerra aceleró además el acercamiento de Ucrania a Europa y fortaleció el apoyo occidental a su independencia. Incluso transformó el equilibrio estratégico del norte de Europa: Finlandia y Suecia abandonaron décadas de neutralidad o no alineamiento para incorporarse a la OTAN. Moscú buscaba detener la expansión de la Alianza Atlántica y terminó ampliando directamente su frontera con ella. Quería demostrar que Ucrania pertenecía inevitablemente a la esfera rusa, pero sus propias decisiones contribuyeron a convencer a millones de ucranianos de que su seguridad futura dependía precisamente de alejarse definitivamente de Moscú.

Después de comprometer su prestigio, enormes recursos y miles de vidas, retroceder resulta cada vez más difícil. Queda atrapado en la lógica de continuar para justificar lo ya perdido, aunque cada nueva escalada aumente las pérdidas que después tendrá que justificar.

Admitirlo significaría reconocer el fracaso de su visión histórica y de su imagen de restaurador de la grandeza rusa. Por eso responde a la resistencia con más violencia y redefine el significado de la victoria.

Putin conoce la historia de Ucrania, pero utiliza los hechos para justificar una conclusión imperial decidida de antemano. Está tratando de borrar con bombas una identidad forjada durante siglos. Sus propias bombas la han consolidado como pocas veces antes.

¿Está la CIA cayendo en la trampa del castrismo?

La revelación de "The New York Times" sobre la creación de un grupo especial de la CIA para fomentar divisiones dentro de la élite gobernante cubana plantea una pregunta más importante que la propia noticia: ¿y si esa operación hubiera sido prevista desde hace años por la contrainteligencia castrista?

Si el reportaje refleja correctamente la estrategia de Washington, la premisa parece clara: identificar dentro de la dictadura dirigentes pragmáticos capaces de facilitar una transición política desde el aparato del poder. Sin embargo, esa hipótesis merece ser examinada con cuidado.

CUBA NO ES VENEZUELA.

La captura de Maduro solo fue posible cuando sectores del propio Estado concluyeron que la continuidad del sistema era insostenible y facilitar un cambio. Trasladar automáticamente esa experiencia a Cuba podría conducir a un grave error estratégico.

El castrismo ha construido durante más de seis décadas uno de los sistemas de contrainteligencia más cerrados del continente. Su misión no ha sido únicamente vigilar a la oposición, sino controlar permanentemente a su dirigencia política, militar y económica. La historia del régimen está marcada por destituciones, purgas y procesos contra figuras que dejaron de contar con la confianza del núcleo gobernante.

Es posible que existan funcionarios importantes convencidos de que Cuba necesita una transición democrática. Lo difícil es imaginar que alguno esté dispuesto a promoverla mientras el régimen conserve intacta su capacidad de vigilancia y castigo. En un sistema de esas características, un error puede significar el fin de una carrera, la prisión o algo peor.

Una diferencia fundamental entre Cuba y Venezuela radica en la estructura del poder. En Cuba, las decisiones estratégicas se concentran en un grupo reducido que controla las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y los principales recursos económicos del Estado. Mientras ese grupo permanezca cohesionado, una estrategia basada en captar dirigentes individuales difícilmente producirá una fractura decisiva.

Existe otro elemento que rara vez se analiza. Si Washington busca interlocutores dentro del régimen, sería ingenuo suponer que la contrainteligencia cubana permanece pasiva. Es razonable considerar que el propio castrismo procure observar, controlar o influir en esos canales de contacto. Cuando una potencia intenta penetrar un régimen cerrado, ese régimen intenta hacer lo mismo con quien pretende penetrarlo.

Cualquier operación destinada a identificar aliados dentro del castrismo debe contemplar, por tanto, la posibilidad de enfrentarse simultáneamente a una maniobra de contrainteligencia diseñada para confundir, obtener información o manipular las decisiones de Washington.

El verdadero desafío no consiste solamente en encontrar dirigentes descontentos, sino en distinguir quiénes desean realmente un cambio y quiénes podrían estar actuando bajo instrucciones del propio sistema. Esa incertidumbre es uno de los mayores obstáculos para cualquier servicio de inteligencia que opere frente a una dictadura cerrada.

A ello se suma una aparente contradicción. Mientras "The New York Times" describe una operación dirigida a encontrar sectores



pragmáticos dentro del poder cubano, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que la máxima dirección del régimen no desea reformas verdaderas y que Cuba necesita un nuevo liderazgo. Si esa evaluación es correcta, la capacidad de esa misma cúpula para impulsar una transición parecería extremadamente limitada.

También existe un factor político que no puede ignorarse. Una transición encabezada por figuras prominentes del castrismo tendría que obtener legitimidad dentro de Cuba y ante el liderazgo cubanoamericano que respalda la política de la Administración Trump. Ese sector ha denunciado durante décadas la responsabilidad del régimen en la represión, las confiscaciones, los presos políticos y las violaciones de los derechos humanos. Resulta difícil imaginar que respaldara una sustitución de dirigentes destinada a preservar las estructuras esenciales del sistema.

Quizás el mayor riesgo de una estrategia basada en dividir al grupo gobernante no sea la falta de contactos, sino una lectura equivocada de cómo funciona el poder en Cuba. El castrismo ha sobrevivido más de seis décadas porque convirtió el control de sus propios dirigentes en uno de los pilares de su permanencia.

Esto conduce a una pregunta todavía más importante: ¿y si la transición no dependiera de que un grupo de dirigentes cambiara de bando antes del colapso? ¿Y si el verdadero escenario fuera que ese grupo, únicamente cuando comprendiera que ya no puede preservar el régimen, optara por negociar una salida para evitar un desenlace más traumático?

Si esa hipótesis fuera correcta, las estrategias para promover una transición tendrían que ser muy diferentes de las aplicadas en otros países.

Porque si la trampa no consiste en que la CIA sea incapaz de encontrar aliados, sino en que no pueda distinguir entre los auténticos y quienes responden al castrismo, entonces el problema ya no es solamente de inteligencia.

Es de estrategia.